



INFILTRACIÓN. Cuando el narcotráfico retorna siempre en el espectro político

Narcotráfico y política: el reto ciudadano para frenar un cáncer recurrente

Durante las últimas décadas, la intromisión del narcotráfico en la política latinoamericana ha sido un fenómeno recurrente, como lo demuestran los casos de Pablo Escobar y, más recientemente, los sucesos violentos ocurridos en México. En Perú, durante los últimos 30 años, diversos hechos evidencian la relación estrecha entre dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas y financiamiento de campañas políticas. Esta es la historia.

Laura Grados



A lo largo de las últimas décadas, hemos sido testigos de sonados casos que han relacionado directamente el narcotráfico con la política, tanto en nuestro país, como también a nivel latinoamericano. El fenómeno resulta ser recurrente puesto que fuimos espectadores de lo ocurrido con el capo colombiano Pablo Escobar en la década de 1980 y 1990. En épocas recientes, hemos visto casos de líderes o mandos medios del narcotráfico con conexiones políticas, como sucedió con Gerald Oropeza, hasta hace poco afiliado al Partido Aprista Peruano, o el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, fugado hace algunas semanas de la prisión que lo albergaba.

Hacia 1983, Escobar Gaviria era el representante del denominado Movimiento de Revolución Liberal para las elecciones de la Cámara de Diputados de Colombia. Dicha agrupación era una facción del Partido Liberal que tenía como candidato presidencial a Alfonso López Michelsen.

Una crónica del periodista colombiano Juan José Hoyos, titulada “Un fin de semana con Pablo Escobar”, publicada años después de la caída del capo de la mafia, acaecida en 1993¹, narra los lujos con que el traficante de drogas atraía a los políticos colombianos de esa época.

Escobar había mandado comprar terrenos en la carretera entre la ciudad de Medellín y Puerto Triunfo, a orillas del río Magdalena. En dichas tierras, había sembrado todo tipo de árboles traídos de otros lugares del mundo y las había poblado con jirafas e hipopótamos de África, búfalos estadounidenses y vicuñas peruanas, formando así un inusual zoológico que mostraba a sus visitantes.

Hasta ese rincón que trataba de emular el mismísimo paraíso, llevaba a senadores, diputados y candidatos con los que hacía vida partidaria. Hasta ahí llegó el periodista Hoyos,

“Hasta ese rincón que trataba de emular el mismísimo paraíso, llevaba a senadores y diputados y candidatos con los que hacía vida partidaria. Hasta ahí llegó el periodista Juan José Hoyos, para atestiguar cómo el narcotráfico construía lazos con la política”

¹ El informe apareció originalmente en la revista El Malpensante y fue incluida en Antología de crónica latinoamericana actual, volumen editado por Darío Jaramillo Agudelo



Luego de la caída del régimen fujimorista, se iniciaron investigaciones periodísticas y judiciales sobre los vínculos de Vladimiro Montesinos con el narcotráfico. Incluso se localizó la conexión con el exdueno de Aerocontinente, Fernando Zevallos.

para atestiguar cómo el narcotráfico construía lazos con la política en sendas cenas con cantidades profusas de vino. El capo del Cartel de Medellín logró un puesto como parlamentario suplente pero; al conocerse sus vínculos con la delincuencia, terminó siendo separado del Partido Liberal y, posteriormente, de la política.

En suma, Escobar representaba lo que se conoce hoy como una organización vertical en el narcotráfico. Personificaba su imperio. Con él se terminó la era del mandamás como jefe de un entramado delictivo de este tipo. Así lo explica el investigador principal del Laboratorio de Criminología Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Nicolás Zevallos.

Mientras Escobar aportaba a Colombia los años más oscuros de la historia de ese país, casi en forma paralela, en Perú cobraba vitalidad el nombre de Carlos Langberg, a quien luego se le atribuyó la propiedad de un cargamento de media tonelada de droga valorizada en un millón de dólares y por ello fue condenado a 14 años de prisión en 1984.

Retratado como un impulsivo sujeto de iracundo carácter en el libro “La Calavera en Negro” del periodista Gustavo



© Diario 16

Alan García tentará un tercer mandato bajo la sombra de los narcoidultos, tanto por el otorgamiento masivo de gracias presidenciales como por el presunto cobro de cupos para su obtención por parte de funcionarios de su gobierno.

Gorriti, Langberg mantenía una peligrosa cercanía con el Partido Aprista Peruano. En dicho volumen, que resume las investigaciones realizadas por el periodista para la revista *Caretas* sobre este caso, se indican sus cercanías con los dirigentes partidarios Jorge Idiáquez y Fernando León de Vive-ro.

Langberg era dueño del diario P.M., tribuna periodística desde la que ventilaba sus odios en contra de los políticos de turno y también contra los dueños de otros medios de comunicación. Gorriti relata cómo el propio narcotraficante escribía en una sección titulada "Página en blanco" en donde insultaba a directores de los medios de la competencia, como Manuel Ulloa (Expreso), Aurelio Miró Quesada (El Comercio), Arturo Salazar Larraín (La Prensa), Guido Chirinos (Última Hora) y Enrique Agois (Correo).

Una demostración del carácter violento de Langberg, con alardes de poder, se produjo cuando disparó al aire en el local del diario que encabezaba, luego de enterarse que los periodistas de la revista *Caretas* estaban tras sus pasos. Así se lo narró un redactor de P.M. a Gorriti, cuyo testimonio aparece en "La Calavera en Negro".

Langberg financió la campaña de Armando Villanueva en las elecciones presidenciales de 1980. Incluso asumió los gastos hospitalarios del líder histórico del Apra, Víctor Raúl Haya de la Torre y de la última casa en la que vivió: Villa Mercedes.

Luego del escándalo que supuso el destape de los negocios turbios, se formó una comisión en el Apra para investigar los vínculos con el narcotraficante. Alan García formó parte de este grupo de investigación. El escándalo catapultó la carrera de García, quien asumió la secretaría del partido en 1982. En 1985, postuló y ganó la Presidencia de la República. También en dicha ocasión se especuló sobre posibles financiamientos obtenidos por dinero del narcotráfico.

Las sospechas del financiamiento irregular parecieron cobrar validez cuando en Lima explotó el laboratorio de pasta básica propiedad de Reynaldo Rodríguez López, lugar conocido por la prensa como "Villa Coca", y el gobierno aprista reemplazó al fiscal a cargo de las investigaciones por otro que archivó el caso. Solo unos cuantos mandos policia-les fueron sentenciados.

El caso Langberg sería el primero pero no el único si nos referimos a la infiltración del narcotráfico en la política. Ya en el gobierno de Alberto Fujimori, hoy preso en el penal de Barbadillo sentenciado por corrupción, homicidio y secuestro, se cocinaba lo que algunos llaman una especie de "narcoestado".

En el capítulo siete de su libro "El espía imperfecto: la telaraña siniestra de Vladimiro Montesinos", los periodistas Sally Bowen y Jane Holligan, revelan - a partir de las versiones de los narcotraficantes Demetrio Chávez Peñaherrera alias "Vaticano" y Óscar Benites- que existía una maquinaria en el

Huallaga, en donde los propios oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas del Perú participaron del tráfico ilícito de drogas.

"Hace solo unos años, Campanilla era apenas un miserable pueblito del valle del Huallaga: caluroso, húmedo, pobre y objeto de ocasionales incursiones de las columnas armadas de Sendero Luminoso. Hoy en día, Campanilla bulle con el negocio más floreciente del Perú: la exportación ilícita a los cárteles colombianos de la pasta básica elaborada con las hojas de coca que se cultivan en los alrededores", describen en la página 167 del mencionado texto.

El libro narra que cerca del pueblo antes mencionado se encontraba la base militar de Punta Arenas, que en teoría debía controlar la actividad subversiva. Sin embargo, de los 120 soldados del Ejército Peruano acantonados en el lugar, 50 de ellos se encargaban de monitorear la llegada y salida de los vuelos que transportan drogas.

Los oficiales recolectaban los cupos en efectivo de los intermediarios o traqueteros, quienes compraban la PBC directamente de los pequeños cocalleros y la vendían a los patronos de las firmas. 20 dólares por kilo era el precio del cupo.

Este texto incluso menciona, por primera vez, las conexiones entre Montesinos y el exdúo de Aerocontinente, Fernando Zevallos, en el negocio del narcotráfico, lo que llevó a un proceso por difamación a las autoras. Finalmente, Bowen y Holligan fueron absueltas y Zevallos condenado a 20 años de prisión por sus vínculos con esta actividad ilegal.

Ya en este milenio, el expresidente Alan García debió dar explicaciones sobre cómo Alfredo Sánchez Miranda, hijo del empresario procesado por lavado de activos presuntamente provenientes del narcotráfico, Orlando Sánchez Paredes, terminó donando cinco mil dólares para la campaña del 2006 del líder aprista. Ante las denuncias, el APRA se vio obligado a devolver el dinero cinco años más tarde y García dijo que "no tuvo conocimiento" de este aporte.

"Disparó a las paredes del local en donde quedaba el diario, luego de enterarse que los periodistas de la revista Caretas estaban tras sus pasos. Así se lo narró un redactor de P.M. a Gustavo Gorriti y cuyo testimonio aparece en La calavera en negro".

© Agencia EFE



Carlos Langberg fue el primer narcotraficante a quien se asoció con la política. Gustavo Gorriti investigó sus nexos delictivos en México, así como sus contactos con el Partido Aprista Peruano.

Terminado el gobierno aprista, saltó el escándalo de los "Narcoindultos". Se trató, como lo han ido esclareciendo las investigaciones periodísticas y fiscales después del 2011, de un objetivo claro: conmutar e indultar las penas en su mayoría a procesados por Tráfico Ilícito de Drogas (TID), en varios casos, a cambio de dinero.

El resultado: un exfuncionario de confianza palaciega, Miguel Facundo Chinguel, bajo prisión preventiva y procesado junto a 16 personas más. Actualmente se lleva a cabo el juicio oral ante la Sala Penal Nacional, en el que se pueden establecer la responsabilidad de estos procesados, así como posibles nuevas investigaciones contra el exministro de Justicia Aurelio Pastor y el expresidente García.

De la verticalidad al trabajo por bloques

El investigador de la PUCP, Nicolás Zevallos, explica que el narcotráfico es una actividad económica. Al margen de la ley, en efecto, pero una actividad económica con fuerte poder en el país al fin y al cabo.

De hecho, el vínculo narcotráfico - política nace con un fin específico. En palabras de Zevallos Trigo, el brazo extendido hacia los políticos y el Estado nace con el objetivo único de obtener ciertos beneficios. Por ejemplo, en la evasión de controles para el desarrollo de sus actividades.



Nicolás Zevallos, investigador del Laboratorio de Criminología Social de la PUCP, enfatizó que los narcotraficantes buscan vincularse con los políticos y el Estado para arribar al objetivo único de obtener ciertos beneficios para sus actividades.

“Mientras más grande sea un partido político, más vulnerable es. Como organización política es atractiva al narco. El nivel de penetración en la toma de decisiones hace que sea mucho más vulnerable”, agrega el politólogo.

Como lo habíamos mencionado líneas más arriba, en el país y en general en toda la región, la estructura del narcotráfico cambió con la muerte de Pablo Escobar. Existe un eslabón vinculado al comercio, al consumo y a la elaboración de la droga.

En el Perú está muy presente la fase de la cadena vinculada a la producción, mediante el cultivo de hoja de coca; el refinamiento del producto, del que se obtiene la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de dicha sustancia; y un tercer elemento que se vincula con el acopio y la exportación, declara Zevallos.

“A partir de estos elementos tenemos casos como alcaldes que están vinculados a la defensa del cultivo de la coca, o al

traslado de la coca a zonas de producción desde zonas de acopio”, continúa el especialista.

En la cadena de comercio, se encontraría un caso como el de Gerald Oropeza, en él se busca un brazo político para facilitar o agilizar los trámites para el transporte de narcóticos. Y también por un tema de impunidad. Los narcoindultos son el mejor ejemplo de eso, considera Zevallos.

Por lo tanto, el narcotráfico en el Perú ya no tiene una cabeza visible, entendida como un capo de la droga que centralice todas las fases del negocio. Ahora existen pequeños proveedores de fines específicos. Unos se encargan de cultivar, transportar, cocinar y en el caso de Oropeza es un bloque que se encarga de acopiar la droga y cargarla en contenedores hacia el exterior. Esa es su labor. Su negocio es llevarla del punto A al punto B.

“Aunque resulta muy evidente cómo se infiltra el narcotráfico en la actividad económica, se pierde mucho de vista. Es importante para entender cómo se inicia y cómo se vincula con el resto de actores incluidos los partidos políticos. No es que exista un narcopartido, lo que hay son narcoaliados, narcocontactos que hacen que acciones puntuales no sucedan. Permite que en un momento determinado un cargamento no se mueva, una poza no se intervenga o una casa no se fiscalice”, aclara el investigador.

El papel del Estado y el rol ciudadano

Pero ¿Qué papel juega el Estado y los gobiernos de turno en la lucha contra el tráfico ilícito de droga? ¿Cómo afecta a

“No es que exista un narcopartido lo que hay son narcoaliados, narcocontactos que hacen que acciones puntuales no sucedan: permite que en un momento determinado un cargamento no se mueva, una poza no se intervenga o una casa no se fiscalice”.

“Si ya sabemos que hay dudas respecto del almacén de Kenji Fujimori en donde se encontró droga, o si sabemos que un expresidente conmutó las penas a narcotraficantes, lo lógico es que el ciudadano no vuelva a votar por esa gente”.

nuestra democracia que el brazo del narcotráfico alcance los pasillos gubernamentales?

Para el exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, existen dos ámbitos de acción que permiten un control mucho más riguroso y efectivo de la infiltración del narcotráfico en la política.

Para empezar, están las normas sobre financiamiento de partidos políticos. El aporte ilimitado por parte de privados (y no solo del narcotráfico sino empresas formales montadas con intereses propios que luego se trasladan a quienes son aspirantes a gobernar) y la inexistencia del aporte público a agrupaciones políticas, propician un clima como el actual: la infiltración flagrante del narcotráfico.

En segundo lugar, pero no menos importante, se encuentra la necesaria reforma de la Ley de partidos políticos, donde se planteó originalmente una sanción que quitaba recursos estatales a las agrupaciones que incumplan con la transparencia de sus aportes. Sin embargo, el financiamiento público no se aplica en el Perú en la práctica, debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas no brinda recursos para ello.

“Si observamos la reforma a la ley de partidos políticos que establecía que, ante el incumplimiento de determinados parámetros para el financiamiento, la sanción era retirar la subvención pública, y esa sanción no se puede aplicar porque hasta ahora no hay aporte público, pues eso habla de una falta de voluntad política absoluta en la que está comprometido el Ejecutivo pero creo que con más intensidad el Parlamento”, agrega el exprocurador.

El otro ámbito tiene que ver con el ejercicio de control del ciudadano: la rendición de cuentas que se castiga en las áforas y que llama a la reflexión ciudadana.

“Si ya sabemos que hay dudas respecto del almacén de Kenji Fujimori en donde se encontró droga, o si sabemos



Julio Arbizu, exprocurador anticorrupción, remarcó el rol del periodismo y la academia para mantener informado al público sobre posibles vinculaciones entre política y narcotráfico.

que un expresidente conmutó las penas a narcotraficantes, lo lógico es que el ciudadano no vuelva a votar por esa gente. Pero esto requiere un nivel de información de la que es responsable también el periodismo y la academia”, concluye Arbizu.

En todo caso y con conocimiento de causa (y efecto), la tarea recae en nosotros como ciudadanos: para advertir, informar y denunciar la presencia del narcotráfico en las distintas organizaciones políticas. Es un reto que no podemos seguir pasando por agua tibia.